

Salamanca, Guanajuato, a 27 veintisiete de agosto de 2021 dos mil veintiuno, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-41/2021**, promovido por **XXXXXXXXXX**, por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 16 dieciséis de junio de 2021 dos mil veintiuno, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I.** La boleta de infracción con número de folio XXXXXXXXX, la cual le fue notificada el 12 doce de junio de 2021 dos mil veintiuno.

- II.** La calificación de la infracción con número de folio XXXXXXXXX del 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno referida en el punto anterior, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 en Moneda Nacional).

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para obtener la devolución de la cantidad que erogo con motivo de un acto administrativo que a su juicio resulta ilegal y la abstención o eliminación de cualquier tipo de registro de carácter negativo c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha de 22 veintidós de junio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite

la demanda y se ordenó correr traslado de ella a las autoridades demandadas. Se solicitó a la Coordinación de Oficiales Calificadores para que en el término de 3 tres días proporcionaran el nombre del servidor público, de quien la había calificado para que puedan ser emplazados legalmente. Y a la Dirección de Vialidad para que informe el nombre del servidor público que realizó el acto.

Además, con fundamento en el artículo 304 E del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se ordenó llamar a juicio a la tesorería municipal de Salamanca, Guanajuato en calidad de tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 14 catorce de julio de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades por proporcionando el nombre de los servidores públicos, para que estos fueren emplazados legalmente.

Además, se tuvo al tesorero municipal por compareciendo al presente proceso en tiempo y forma.

En auto de fecha 09 nueve de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a el agente vial, por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, así como proporcionando domicilio y señalando autorizados legales para recibir todo tipo de notificaciones. En cuanto a el Oficial Calificador, por no contestando en tiempo y forma la demanda por lo que se le tienen por ciertos sus derechos, esto de conformidad con el artículo 279 del Código multicitado.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del 27 veintisiete de agosto de 2021 dos mil veintiuno, únicamente la parte actora los presento por escrito.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II; 304-A, 304-B y 304-C del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo; 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con copia certificada de la boleta de infracción, con número de folio XXXXXX –foja 19-, emitida el 12 doce de junio de 2021 dos mil veintiuno adminiculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 117,118, 123 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Así como en la tesis jurisprudencial I.3o.C. J/37, que a la letra dice:

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la factura original XXXXXX –foja 08- emitida por la autoridad exactora, en la cual se aprecia el pago de la multa que aparejo el acto refutado.

Comprobante fiscal que por sus características en cuanto a sello oficial, firma, membrete del municipio de Salamanca, Guanajuato, el haber sido expedido por servidores públicos en ejercicio de sus

funciones, es un documento público con valor probatorio pleno para acreditar que el ahora actor realizó el pago del acto combatido, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo que la objeción de las pruebas documentales que hace valer el tercero en el presente asunto, con fundamento en el artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, no ha lugar pues si bien las documentales hacen prueba plena de su existencia.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento.

Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demandada y el tercero con un derecho incompatible al del actor, quienes en síntesis expresan lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por las autoridades demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones.

Del folio de infracción XXXXX se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal “A quien Corresponda” (sic).

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, dejó abierta la posibilidad de que cualquier persona se sintiera afectada en su esfera jurídica.

Entonces, si **XXXXXXXX**, acude a promover el presente proceso como afectado por la imposición de la boleta de infracción, teniendo es su poder la factura original, **XXXXXXXXXX** el cual se aprecia que en fecha 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno, realizó el pago por concepto de multa, por la cantidad de \$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100) con la cual acredita la afectación realizada a su esfera jurídica.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en

los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición

para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. Antes de entrar al fondo del asunto, si ello resulta procedente, es importante en principio, observar lo dispuesto por el artículo 302, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el que se establece que debe de analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público, si en el caso que nos ocupa existe incompetencia de la autoridad para dictar el acto administrativo combatido, determinación que se encuentra fortalecida por analogía en la Jurisprudencia 2ª/J.218/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de diciembre de 2007 y que señala el rubro siguiente:

“Competencia. Su estudio oficioso respecto de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, debe ser analizada por las salas del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. “

En efecto esta juzgadora considera que la boleta de infracción **XXXXX** deviene ilegal en atención a que fue emitida por una autoridad incompetente para su elaboración, atento a las siguientes consideraciones de derecho:

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone como requisito esencial y obligación a todas las autoridades citar debidamente su legal competencia a fin de generar actos de molestia, esto señalando, su marco

jurídico de actuación que los legitime para ello, para mayor comprensión se transcribe el texto constitucional aludido:

<<Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.>>

En ese orden de ideas, todo acto de autoridad que provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 137, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos deben contener el elemento de validez, entre otros, el de **ser expedido por autoridad competente**.

A fin de que XXXXXXXXX cuyo nombramiento de agente vial lo tiene con efectos de a partir del día lunes 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve al 11 once de agosto del mismo año -foja 49- y no de la fecha en la que se emitió el acto, pues, en ese momento no tenía competencia para emitir una boleta de infracción como agente vial. Dentro del acto refutado se puede observar que se realizó el 12 doce de junio de 2021 dos mil veintiuno. Dicha legitimidad debe encontrarse prevista dentro del Reglamento Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato que regule las atribuciones, facultades derechos y obligaciones de acuerdo al grado que ostente dentro de la institución.

Es de resaltar, que la premisa de legalidad estriba en que la autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que esta no le prohíbe, en el caso que nos ocupa

se advierte que la emisión de la boleta de infracción XXXX del 12 de junio de 2021 dos mil veintiuno, fue elaborada *por XXXXXXXXXXXX quien en ese momento no contaba con el nombramiento de, agente vial, pues como se puede apreciar en su nombramiento, ya se encontraba por terminado, así como tampoco fundamenta ni motiva su competencia con el cual contaba en ese momento, al no tratarse de un agente vial para emitir dicho acto*, y para tales efectos aportó copia certificada de su nombramiento oficial –foja 49- del cual se desprende el cargo/rango que ostenta dentro de la institución, de manera temporal.

Así las cosas, al ser un elemento de validez previsto en la fracción I del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, aunado a lo señalado en la fracción VI de dicho artículo relativo a la debida fundamentación y motivación de los actos administrativos, además de que la debida fundamentación de la competencia es una garantía constitucional consignada en el artículo 16 de la Carta Magna y requisito mínimo del acto de autoridad que consiste en señalar el fundamento legal que da atribuciones para emitir su acto, citando de manera correcta el precepto legal, fracción, inciso, subinciso o transcribiendo el apartado correspondiente que legitime su actuación.

Ahora bien, el artículo 143 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, consigna lo siguiente:

Artículo 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez establecidos en el artículo 137 del presente Código, producirá la nulidad del acto administrativo.

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán obligación de cumplir el acto.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que lo hubiere emitido u ordenado y, en su caso, a la indemnización para el afectado, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo tanto, un acto administrativo que no cumple con alguno de los elementos del citado artículo 137, como en la especie resulta al ser emitido por autoridad que carecía de competencia para la emisión de su acto, produce la nulidad total del mismo.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 143, 300 fracción II y 302 fracción I del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente es decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción XXXX, elaborada por XXXXXXXXXXXXXXX.

Sirve de apoyo al caso concreto, la siguiente Tesis Aislada con registro 188678, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece:

<<AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere

a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente administrado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.>>

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; página 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” -----

Por consiguiente, la declaración de nulidad total del acto impugnado, produce como consecuencia que al actor ya no se le aplique ninguna sanción administrativa por los hechos indicados en el folio de infracción sobre el cual recayó la nulidad lisa y llana.

En virtud del estudio oficioso realizado por esta juzgadora referente a la competencia de la autoridad emisora del acto, es innecesario que se analicen los conceptos de impugnación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, pues a nada práctico conduciría, pues el folio de infracción **XXXXX** por las causas expuestas ha quedado insubsistente.

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

a) el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la cantidad de **\$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 en moneda nacional)**, misma que erogo por concepto de la multa que aparejo el acto impugnado.

b) el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato.

En cuanto al inciso a) el actor acredita el pago de la multa aportando al sumario ejemplar original consistente en comprobante fiscal con referencia XXXXXX de fecha 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno, documento que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, creando convicción en esta juzgadora respecto a que tal pago corresponden al mismo acto administrativo que ha quedado anulado y por ende constituye ahora, producto de un acto viciado que el accionante injustamente se vio obligado a resentir.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, ***ha lugar al reconocimiento*** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

<< Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la devolución de la cantidad de **\$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 en Moneda Nacional)**, misma que deberá de ser entregada mediante título nominativo –cheque- en favor del justiciable o en efectivo, lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia. Si bien se le tuvo al agente vial por no contestando el juicio de nulidad en su contra, sin embargo, no lo exime de la obligación de dar total cumplimiento a la presente sentencia.

Encuentra aplicación por analogía al caso concreto, el criterio expedido por el H. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Guanajuato, del rubro y texto siguientes:

«DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA.- Si el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen fue declarado ilegal.^{1º}»

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de cinco días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. No se sobresee el proceso, de acuerdo con lo asentado en el **CONSIDERANDO TERCERO** de este fallo.

¹(Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008).»

TERCERO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

CUARTO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. -----

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, Juez Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Lesli Hayde Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe. - - - -